



Comunicación de seguimiento a las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño. ARALMA – Asociación Civil

98ª Sesión del CRC. Evaluación del cumplimiento de las Observaciones Finales (2024–2025)

Violencia sexual infantil como forma de tortura y persistencia de la impunidad estructural en Argentina

Diciembre 2025

1. Objeto de esta comunicación de seguimiento

Esta comunicación temática es presentada por ARALMA Asociación Civil junto a organizaciones aliadas como seguimiento directo al [Informe Alternativo](#) remitido al Comité de los Derechos del Niño en abril de 2024 y a las Observaciones Finales emitidas por el Comité en septiembre de 2024 (CRC/C/ARG/CO/7). En esa comunicación se desarrollaron dos ejes centrales: la necesidad de eliminar la prescripción penal de los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y la creación de una comisión independiente de la verdad para investigar décadas de violencia sexual en todos los entornos.

El propósito de este documento es exponer la situación actual de la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes en Argentina, evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Comité y señalar retrocesos, omisiones y vacíos estructurales ocurridos durante el período 2024–2025.

A diferencia de la comunicación anterior, este Informe sombra incorpora de manera explícita el marco jurídico internacional que reconoce que la violencia sexual infantil constituye tortura o, en su defecto, trato cruel, inhumano o degradante, de acuerdo con la Convención contra la Tortura y la interpretación consolidada del propio Comité de los Derechos del Niño. Este reconocimiento modifica la naturaleza de las obligaciones estatales: los Estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente estos crímenes sin dilación, sin obstáculos procesales y sin límites temporales que consoliden impunidad. [Ver nota](#)

La información presentada se basa en fuentes oficiales del Estado argentino, documentación del Poder Judicial, bases de datos de fiscalías especializadas, informes de defensorías nacionales y provinciales, así como en más de dos décadas de acompañamiento clínico, jurídico y psicosocial a víctimas y sobrevivientes en todo el país.

2. Magnitud de la violencia sexual infantil en Argentina y ausencia de avances

El Comité expresó preocupación por los “altos niveles de violencia y abuso sexuales en la niñez” y recomendó al Estado argentino, entre otros puntos, asegurar la investigación rápida de los casos, eliminar la prescripción penal y crear una base de datos nacional unificada sobre violencia sexual infantil (CRC/C/ARG/CO/7). Durante el período supervisado, el Estado no ha avanzado en ninguno de estos puntos.

Los datos oficiales disponibles, fragmentados, parciales y limitados por la falta de un sistema nacional de información, confirman que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo un fenómeno estructural, persistente y mayoritariamente intrafamiliar:

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que en el primer trimestre de 2025 recibió 712 presentaciones que afectaron a 958 niñas, niños y adolescentes; el 11 % correspondió a abuso sexual, con una edad promedio de 9 años y con los progenitores como principales agresores.

Fuente: <https://www.csjn.gov.ar/novedades/detalle/9763>

La Base General de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial registró 2.076 causas iniciadas por menores de 18 años en 2024, de las cuales, entre los delitos no patrimoniales, un 32,1 % se trató de delitos contra la integridad sexual.

Fuente: <https://www.csjn.gov.ar/bgd/verNoticia?idNoticia=9522>

Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el 77,2 % de las sentencias por trata de personas corresponden a explotación sexual, incluyendo víctimas menores de edad.

Fuente: <https://www.mpf.gob.ar/protex/plataforma-estadistica/>

El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires documenta un incremento sostenido en causas de explotación sexual infantil digital, incluyendo producción, distribución y consumo de representaciones de abuso sexual infantil (Informe PI 2023).

Fuente: <https://www.mpba.gov.ar/files/informes/Informe-PI-2023.pdf>

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación señaló en su informe federal 2025 que Argentina continúa sin contar con una base de datos nacional, que existe subregistro crónico y que las provincias emplean criterios heterogéneos que impiden dimensionar la magnitud real del problema.

Fuente:

<https://ladefe.gob.ar/wp-content/uploads/2025/04/Violencia-sexual-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-Analisis-federal-de-protocolos-1.pdf>

Estos datos confirman que la violencia sexual infantil en Argentina ni disminuye ni se aborda con políticas públicas robustas, y que el Estado carece de mecanismos de monitoreo y prevención que cumplan con los estándares mínimos exigidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Violencia sexual infantil como tortura: implicancias para el Estado argentino

La violencia sexual infantil reúne todos los elementos jurídicos que definen la tortura según la Convención contra la Tortura: dolor o sufrimiento físico o mental grave, intencionalidad del perpetrador, asimetría absoluta de poder, dominación del cuerpo y de la subjetividad del niño, daño psíquico persistente equiparable al terror y a la aniquilación subjetiva.⁽¹⁾

La Observación General N° 13 del Comité de los Derechos del Niño identifica la violencia sexual como una de las formas más extremas de violencia y subraya el carácter reforzado de las obligaciones estatales en materia de prevención, investigación y reparación:

El Comité de los Derechos del Niño ya ha reconocido que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye trato cruel, inhumano o degradante y, en múltiples situaciones, tortura. Por lo tanto, el Estado argentino no puede mantener normas procesales que perpetúen la impunidad, como la prescripción penal, la falta de mecanismos de denuncia accesibles o la ausencia de reparaciones integrales que podrían conseguirse a través de las comisiones de la verdad que recuperarían la verdad histórica de los hechos.

4. Retrocesos institucionales (2024–2025) y agravamiento de las condiciones que permiten la violencia sexual infantil

Desde la emisión de las Observaciones Finales del Comité en septiembre de 2024, el Estado argentino no solo no avanzó en las recomendaciones establecidas en materia de prevención, investigación y reparación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, sino que además se registraron retrocesos institucionales que profundizan las condiciones estructurales que permiten la impunidad y la reproducción sistemática de estos crímenes.

Los principales retrocesos observados son los siguientes:

4.1. Desmantelamiento de áreas estatales encargadas de políticas de infancia y género

Entre finales de 2023 y durante 2024–2025, diversas áreas de gobierno vinculadas a infancia, género y protección social sufrieron procesos de: desfinanciamiento, reducción de personal especializado, eliminación de programas, degradación institucional en su jerarquía, discontinuidad de líneas de apoyo psicosocial.

Estas conclusiones se apoyan, entre otros insumos, en el análisis de informes presupuestarios oficiales sobre el gasto vinculado con la niñez y la adolescencia en el presupuesto nacional, en informes de organizaciones especializadas en monitoreo del gasto público (como ACIJ y ELA) y en testimonios documentados de equipos técnicos nacionales y provinciales.

Fuentes:

[ACIJ / ELA – Informe “3J 2024 – Ajuste, desigualdad y retrocesos en políticas de género y diversidad”](#):

[Jefatura de Gabinete de Ministros – Seguimiento del gasto vinculado con la niñez y adolescencia en el presupuesto nacional](#)

[A dos años del actual gobierno, se profundiza el retroceso en los derechos de mujeres y diversidades](#)

Esta reducción de capacidades estatales afecta directamente la implementación de medidas mínimas de prevención, acompañamiento, acceso a justicia, investigación y reparación dirigidas a víctimas de violencia sexual infantil. La ausencia de políticas públicas activas contradice la obligación estatal de “adoptar medidas para proteger a niñas y niños contra toda forma de violencia”, tal como establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Limitaciones y vacíos en la información oficial sobre líneas de denuncia (Líneas 137 y 102)

Si bien el Estado argentino mantiene dispositivos formales de atención la información oficial disponible muestra importantes carencias que impiden evaluar su eficacia en la prevención y detección de la violencia sexual infantil.

En el caso de la Línea 137, el portal de [Datos Abiertos del Ministerio de Justicia](#) publica microdatos de llamados e intervenciones por violencia sexual solo hasta julio de 2024. No existen informes públicos consolidados para 2025, ni informes completos, que permitan analizar la evolución anual desagregada por edad, tipo de violencia o jurisdicción y la resolución de los casos. Una información que hace algunos años era publicada en informes anuales por el organismo.

En relación con la Línea 102, no existe un sistema nacional unificado de datos. La información disponible proviene de algunas jurisdicciones —principalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y La Pampa, Mendoza y muestra la existencia del dispositivo, pero sin estadísticas públicas que permitan conocer cantidad de llamados, motivos de consulta, indicadores de desempeño o volumen de casos de violencia sexual infantil atendidos. No hay datos oficiales que permitan evaluar cobertura territorial, dotación de personal o capacidad de respuesta frente a situaciones de urgencia.

En este contexto, la ausencia de datos completos, comparables y desagregados constituye por sí misma un incumplimiento de las recomendaciones del Comité (CRC/C/ARG/CO/7). La falta

de información pública impide medir si el Estado ha fortalecido o debilitado estos mecanismos y limita la transparencia, la prevención y la protección efectiva frente a violencias que constituyen tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

Fuente:

[Informe anual.Defensoría de los Derechos de NNyA. Nación Argentina.](#)

4.2. Ausencia de una estrategia nacional de prevención de violencia sexual infantil

A pesar de que el Comité recomendó expresamente “elaborar e implementar una estrategia nacional integral para prevenir la violencia sexual” no existe ninguna iniciativa estatal en marcha que cumpla ese mandato.

No se registran campañas nacionales sostenidas, programas federales coordinados, planes de acción, protocolos actualizados ni mecanismos de articulación entre provincias. Esta omisión impide que la población acceda a información básica de prevención y que los sistemas sanitarios, educativos y judiciales detecten tempranamente casos de violencia sexual y explotación infantil.

4.3. Falta de un sistema nacional unificado de datos

El Estado argentino continúa sin cumplir el requerimiento del Comité de “crear una base de datos nacional desglosada sobre violencia infantil”.

Como consecuencia cada provincia recoge sus propios datos de manera fragmentada, no existen criterios unificados, no hay monitoreo nacional, no se puede medir incidencia real ni evaluar impacto de políticas, se perpetúa el subregistro crónico, que constituye en sí mismo una vulneración de derechos.

Informes recientes de la Defensoría de los Derechos de NNyA de la Nación confirman esta falta estructural de coordinación federal:

“Sólo 15 de las 24 jurisdicciones del país cuentan con protocolos de intervención y/o guías de acción para el abordaje interinstitucional de situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y en muchos casos estos requieren una actualización para alinearse con avances jurídicos y perspectivas profesionales. Algunos de los hallazgos revelan que la mayoría se centra en el proceso penal, opacando el accionar de la justicia civil y de los organismos administrativos. En la mayoría no se hace mención de acciones de prevención y/o sensibilización, ni instancias de capacitación obligatoria a los equipos intervinientes. A su vez, hay una ausencia de una mirada interseccional que considere las particularidades de las personas con discapacidad, migrantes, indígenas entre otras”.

Fuente

[Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación – “Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Análisis federal de protocolos” \(2025\):](#)

4.4. Retrocesos en la capacidad de respuesta estatal ante situaciones de urgencia

Durante 2024–2025, profesionales de la salud, educación, atención territorial y justicia han reportado: cierres o debilitamiento de equipos especializados, falta de recursos para acompañar urgencias, demoras en derivaciones judiciales, ausencia de atención psicoterapéutica inmediata, reducción de dispositivos comunitarios.

Fuente: [Diario El País](#)

Esta situación contraviene la recomendación del Comité de “garantizar intervenciones integrales inmediatas para las víctimas” (CRC/C/ARG/CO/7)

4.5. El Estado no ha adoptado ninguna medida para eliminar la prescripción penal

A pesar de la recomendación explícita del Comité de “eliminar la prescripción penal para los delitos de violencia sexual infantil” no se registró ningún avance legislativo.

Durante el período considerado: no se convocaron comisiones para tratar el tema, no hubo dictámenes, no se debatió en el recinto, no se emitió ninguna propuesta oficial para cumplir el mandato del Comité.

Mientras tanto, continúan prescribiendo causas de extrema gravedad, consolidando impunidad estructural.

En este contexto, resulta necesario señalar el anuncio reciente del Gobierno nacional —a través de la ministra de Seguridad— sobre la inminente presentación de un anteproyecto de reforma del Código Penal que incluiría la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, a la fecha el texto oficial de dicho anteproyecto no ha sido publicado ni puesto a disposición para consulta pública, y no existe claridad sobre su contenido real, alcances ni fundamentación jurídica. Asimismo, no se ha convocado a especialistas, organizaciones de la sociedad civil ni a sobrevivientes para trabajar de manera conjunta y plural en una reforma de esta envergadura. Esta falta de transparencia y participación temprana genera preocupación, dado que la imprescriptibilidad constituye una deuda histórica del Estado argentino para garantizar verdad, justicia y reparación frente a la violencia sexual infantil.

Fuente:

[La gaceta 1 de diciembre de 2025](#)

4.6. Debilitamiento de mecanismos de denuncia y acceso a justicia

La falta de campañas públicas, la ausencia de canales especializados de denuncia y la discontinuidad de equipos territoriales refuerzan las barreras que impiden que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a justicia en tiempo útil.

El Comité también había recomendado “crear canales accesibles de denuncia para menores en todos los entornos, incluyendo instituciones” (CRC/C/ARG/CO/7), recomendación que sigue incumplida.

5. Incumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (2024–2025)

A continuación se presenta un análisis detallado del grado de cumplimiento estatal respecto de cada una de las recomendaciones vinculadas a violencia sexual, tortura, explotación y acceso a justicia, formuladas por el Comité en septiembre de 2024. El período examinado abarca desde la emisión de las Observaciones Finales hasta diciembre de 2025.

5.1. Recomendación 23.a — Estrategia nacional integral de prevención de la violencia sexual infantil

Estado de cumplimiento: No cumplida.

El Comité instó al Estado argentino a desarrollar e implementar una estrategia nacional integrada para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Durante el período supervisado:

- ❖ No se elaboró ningún plan nacional.
- ❖ No se diseñaron políticas federales coordinadas.
- ❖ No se emitieron lineamientos generales para provincias o municipios.
- ❖ No existen campañas públicas de prevención sostenidas.

La ausencia de una estrategia nacional contradice directamente las obligaciones enmarcadas en los artículos 19 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

5.2. Recomendación 23.b — Legislación y políticas específicas para abordar la violencia sexual infantil

Estado de cumplimiento: No cumplida.

El Estado no ha elaborado, presentado ni discutido ningún proyecto legislativo que materialice las recomendaciones del Comité.

No se promovieron reformas para:

- ❖ actualizar marcos normativos,
- ❖ fortalecer mecanismos de protección,
- ❖ estandarizar protocolos,

- ❖ garantizar atención integral especializada.

5.3. Recomendación 23.c — Crear una base de datos nacional unificada

Estado de cumplimiento: No cumplida.

Argentina continúa sin un sistema nacional de datos sobre violencia sexual infantil. La información permanece fragmentada en organismos provinciales o nacionales parciales (OVD, PROTEX, fiscalías, defensorías). No existe:

- ❖ interoperabilidad,
- ❖ criterios comunes de registro,
- ❖ indicadores unificados,
- ❖ actualización anual,
- ❖ informes públicos completos.

La Defensoría Nacional volvió a alertar en 2025 sobre el subregistro crónico y la ausencia absoluta de una coordinación federal de datos:

Fuente:

[Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación – “Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Análisis federal de protocolos” \(2025\):](#)

5.4. Recomendación 23.e — Canales accesibles de denuncia para niñas, niños y adolescentes

Estado de cumplimiento: No cumplida.

El Comité pidió garantizar canales accesibles de denuncia en todos los entornos —hogar, instituciones, escuelas, iglesias, clubes deportivos, comunidades religiosas.

Durante el período observado:

- ❖ No se fortaleció la Línea 102 ni se amplió su alcance.
- ❖ No se crearon nuevos canales especializados para atención de NNyA.
- ❖ No se desarrollaron mecanismos en escuelas o clubes.
- ❖ No se implementaron vías seguras de denuncia para víctimas institucionalizadas.

El acceso a la denuncia sigue dependiendo de adultos intermediarios, lo cual vulnera el principio de autonomía progresiva y el derecho a ser oído (artículos 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Perspectiva interseccional y omisiones estructurales en los protocolos vigentes

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no afecta a todas las personas por igual. Cuando la víctima pertenece a grupos históricamente discriminados —personas con discapacidad, comunidades indígenas, identidades diversas, niñas y adolescentes mujeres, personas migrantes— la vulneración de derechos se profundiza y las barreras para acceder a protección y justicia se multiplican. Estas situaciones requieren un abordaje que reconozca que ciertos grupos están expuestos a mayores riesgos, mayores obstáculos y mayores niveles de impunidad.

Sin embargo, los protocolos y guías vigentes analizados por la Defensoría omiten en gran medida estas dimensiones de vulnerabilidad. La ausencia de una perspectiva interseccional limita la capacidad del Estado para prevenir la violencia, para intervenir adecuadamente cuando ocurre y para garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas y protegidas durante todo el proceso.

Adoptar este enfoque no es accesorio: es indispensable para asegurar la debida diligencia reforzada. [La Guía de Buenas Prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual de UNICEF, 2023](#), señala la necesidad de “una mirada interseccional que permita comprender la complejidad del contexto en el que se encuentran las víctimas, así como deconstruir mitos, prejuicios y estereotipos que operan en todas las etapas de intervención, especialmente en los procesos judiciales”.

Estos sesgos pueden condicionar:cuáles hipótesis se investigan y cuáles se descartan, qué pruebas se recolectan y con qué prioridad,cómo se realizan las pericias, cómo se valora la evidencia presentada, y, en última instancia, si el proceso garantiza o no el derecho de la víctima a obtener justicia.

Los datos relevados por la Defensoría muestran la magnitud de las omisiones: la discapacidad solo aparece mencionada en 8 de los 15 instrumentos analizados, y únicamente 5 incluyen orientaciones específicas para el abordaje; la condición de género se reconoce en 5 instrumentos, de los cuales solo 3 explicitan criterios claros; la pertenencia indígena es mencionada una sola vez y sin ninguna especificación operativa; la situación migratoria o la pertenencia a otras identidades vulneradas prácticamente no figuran.

Fuente:

[Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación – “Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Análisis federal de protocolos” \(2025\):](#)

Sin una incorporación plena de estas dimensiones, el Estado no cumple con su obligación de garantizar condiciones reales de igualdad ante la ley, ni con los estándares internacionales que exigen medidas reforzadas cuando existen factores acumulados de vulnerabilidad.

5.5. Recomendación 23.f — Denuncia obligatoria por parte de profesionales

Estado de cumplimiento: No cumplida.

No se adoptaron medidas para: revisar o fortalecer marcos de denuncia obligatoria, capacitar profesionales de salud, educación, justicia o deportes, establecer sanciones por incumplimiento, monitorear el cumplimiento efectivo.

La omisión es grave porque la violencia sexual infantil es mayoritariamente intrafamiliar, y la detección temprana depende en gran parte del sistema educativo y sanitario.

Déficit crítico en la formación especializada de los efectores responsables

Todos los efectores que intervienen en la prevención, detección, atención y protección de niñas, niños y adolescentes —salud, educación, justicia, seguridad, deporte, instituciones religiosas, organismos administrativos y equipos territoriales— deben contar con formación obligatoria, permanente, especializada y con perspectiva de derechos humanos. Esta exigencia se desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño

Sin embargo, el análisis de los protocolos y guías realizado por la Defensoría evidencia un déficit estructural:

- ❖ solo 1 de los 15 instrumentos revisados menciona la necesidad de formación especializada y detalla sus contenidos,
- ❖ 8 instrumentos la mencionan de forma general, sin especificaciones técnicas,
- ❖ 6 no incluyen ninguna referencia a capacitación.

Esto significa que la formación de quienes deben proteger a niñas y niños no es homogénea, no es obligatoria en todos los casos y, en muchos contextos, no existe, lo que agrava la exposición al riesgo, debilita la detección temprana y perpetúa la revictimización institucional.

El déficit no puede compensarse únicamente mediante la Ley 27.709, cuyo eje es la capacitación obligatoria en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para agentes estatales. Si bien la ley es un avance normativo, no sustituye la formación específica en signos, síntomas, indicadores clínicos y conductuales, ni las competencias necesarias para la detección temprana, la intervención adecuada, el abordaje sin daño y la protección integral. La implementación actual de la ley no cubre la diversidad de efectores involucrados ni garantiza formación técnica sobre violencia sexual infantil, explotación digital o protocolos de actuación intersectorial.

Fuente:

[Ley 27.709 –Plan Federal](#)

Resulta indispensable que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollen programas propios de capacitación especializada, obligatorios para todos los efectores del

sistema de protección, con contenidos mínimos unificados, módulos de actualización permanente y materiales ajustados a estándares internacionales. Desde ARALMA hemos propuesto la creación de una política nacional de protección infantil organizacional aplicable a todo el sistema de protección en Argentina, así como la conformación de una unidad específica de violencia sexual dependiente directamente de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Sin embargo, la Defensoría continúa acéfala, a pesar del concurso público realizado por la Bicameral de los Derechos del Niño, lo que profundiza la ausencia de conducción y de políticas coherentes a nivel federal.

Sin este despliegue normativo e institucional, el Estado argentino seguirá incumpliendo su obligación de garantizar una respuesta adecuada y oportuna frente a violencias que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

5.6. Recomendación 23.g — Investigación rápida, eficaz y sin revictimización

Estado de cumplimiento: No cumplida.

Durante 2024–2025 no se produjo ningún fortalecimiento del sistema judicial para acelerar investigaciones o evitar la revictimización de niñas y niños. Persisten:

- ❖ demoras estructurales,
- ❖ pericias intrusivas repetidas,
- ❖ dependencia de testimonios únicos,
- ❖ falta de equipos interdisciplinarios,
- ❖ excesiva fragmentación judicial.

Diversos tribunales continuaron declarando la prescripción en causas graves, incluso antes de iniciar juicio, pese a la obligación de debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra menores, tal como lo han recordado el Comité de los Derechos del Niño y otros órganos internacionales.

5.7. Recomendación 23.h — Eliminar la prescripción penal para delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes

Estado de cumplimiento: No cumplida.

No se discutió ningún proyecto de ley orientado a abolir la prescripción.

- ❖ No se convocaron sesiones informativas ni presentaciones en comisiones.
- ❖ No hubo dictámenes.

- ❖ No se debatió en el recinto.

El Estado no cumplió con el mandato explícito del Comité. Mientras tanto, continúa la impunidad estructural, con casos que prescriben sin investigación suficiente.

5.8. Recomendación 23.i — Acceso inmediato a intervenciones integrales

Estado de cumplimiento: No cumplida.

Las Observaciones Finales instruyeron al Estado a garantizar:

- ❖ atención psicológica inmediata,
- ❖ atención médica y forense,
- ❖ acompañamiento jurídico,
- ❖ protección integral post-agresión.

Durante el período observado:

- ❖ numerosos equipos fueron desfinanciados,
- ❖ dispositivos territoriales fueron reducidos,
- ❖ la atención psicológica depende de organizaciones civiles o esfuerzos provinciales aislados,
- ❖ no hay un mecanismo federal de atención integral post-violencia sexual infantil.

5.9. Recomendación 23.j — Apoyo a adolescentes embarazadas por abuso sexual

Estado de cumplimiento: No cumplida.

La reducción de programas de salud sexual, la discontinuidad de dispositivos de acompañamiento y la falta de políticas específicas para adolescentes embarazadas por violencia sexual constituyen un incumplimiento directo de esta recomendación.

6. Imprescriptibilidad del delito de violencia sexual infantil como obligación internacional

La eliminación de la prescripción penal para los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes no es una demanda sectorial ni un reclamo aislado: es una obligación jurídica internacional derivada de los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, particularmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la jurisprudencia consolidada del sistema interamericano.

Durante la 97ª y 98ª sesiones del Comité de los Derechos del Niño, el Estado argentino recibió una recomendación explícita y de carácter prioritario: “El Estado parte debe eliminar la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil”. El incumplimiento total de este mandato constituye una violación continuada de las obligaciones asumidas.

a) La violencia sexual infantil, incluida la explotación sexual comercial, el chineo, el embarazo forzado, la convivencia forzada con el agresor, la violencia sexual institucional y las violencias facilitadas digitalmente, constituye tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La Convención contra la Tortura exige que los Estados investiguen, juzguen y sancionen los actos de tortura sin dilación ni obstáculos indebidos.

El Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye tortura o trato cruel, inhumano o degradante cuando implica:

- ❖ sufrimiento físico o mental grave,
- ❖ intencionalidad del perpetrador,
- ❖ relación de poder absolutamente asimétrica,
- ❖ destrucción del cuerpo, la subjetividad y el proyecto vital del niño, niña o adolescente.

Esto incluye todas las modalidades documentadas en Argentina, entre ellas:

Formas de violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes

- ❖ Violencia sexual intrafamiliar, ejercida por integrantes del núcleo familiar o del entorno de convivencia directa o con funciones de cuidado, que se aprovechan de la relación de confianza, dependencia, autoridad o afecto
- ❖ Explotación sexual comercial, donde bebés, niñas, niños o adolescentes son utilizados en actos sexuales por parte de terceros que obtienen un beneficio económico, material o de poder, incluyendo diferentes formas de mercantilización del cuerpo y mente infantil.
- ❖ Trata de personas con fines de explotación sexual, que implica la captación, traslado, acogida o recepción de niñas, niños o adolescentes mediante engaño, coerción, abuso de poder o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual.
- ❖ Chineo, práctica grupal o serial de violación caracterizada por deshumanización extrema, racismo estructural y sometimiento colectivo, dirigida principalmente contra niñas y adolescentes indígenas, reconocida por organismos de derechos humanos como una forma de violencia sexual agravada.
- ❖ Embarazo forzado, reconocido por organismos internacionales como una forma de tortura y violencia sexual, debido a la privación absoluta de la autonomía corporal, la imposición de la maternidad y el impacto físico, psíquico y social grave y duradero sobre niñas y adolescentes.
- ❖ Convivencia forzada con el agresor, que expone a niñas, niños o adolescentes a violencias sexuales reiteradas y configura un régimen de control cotidiano, coerción y sometimiento equiparable a situaciones de cautiverio doméstico.

- ❖ Violencia sexual institucional, ejercida por funcionarios públicos, agentes estatales, trabajadores de instituciones de encierro, cuidado, salud o educación, o facilitada por la acción, omisión, tolerancia o encubrimiento estatal. Incluye abusos cometidos en dispositivos de protección, institutos penales juveniles, escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad y ámbitos religiosos o paraestatales donde el Estado tiene una obligación reforzada de prevención, control y supervisión.
- ❖ Violencias sexuales facilitadas digitalmente, incluyendo grooming, sextorsión, coerción para la producción de material sexual, transmisión forzada de contenido sexual en vivo (live streaming), producción, difusión y circulación permanente de material de abuso sexual infantil, que prolonga el daño, eterniza la escena criminal y amplifica el alcance del agresor.

Todas estas prácticas producen daño acumulativo y prolongado, y en el caso del entorno digital, victimización ilimitada, porque el material puede circular indefinidamente.

Dado que la tortura no admite prescripción penal, cualquier régimen que mantenga plazos extintivos en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes es incompatible con los estándares internacionales.

b) La obligación de debida diligencia reforzada exige eliminar obstáculos procesales

El derecho internacional impone a los Estados un deber reforzado de garantizar acceso efectivo a la justicia. Las violencias sexuales en la infancia presentan características ampliamente documentadas:

- ❖ revelación tardía, incluso décadas después;
- ❖ silenciamiento por amenazas, dependencia económica o emocional;
- ❖ imposibilidad material o emocional de denunciar durante la minoría de edad, especialmente cuando existe convivencia o encierro institucional;
- ❖ disociación, amnesia traumática y sometimiento prolongado;
- ❖ temor a represalias de agresores individuales, redes o instituciones;
- ❖ revictimización institucional, particularmente grave cuando el abuso ocurre en ámbitos estatales;
- ❖ en violencias digitales, victimización continua, por la circulación indefinida del material.

Por estas razones, organismos internacionales sostienen que la prescripción penal prematura:

- ❖ perpetúa la impunidad,
- ❖ vulnera el derecho a la verdad,
- ❖ impide el acceso a la justicia en condiciones de igualdad,

Por ello, organismos internacionales sostienen que la prescripción penal prematura perpetúa la impunidad, viola el derecho a la verdad y obstaculiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

6.2. Estándares comparados en América Latina

Diversos países de la región han avanzado en la eliminación de la prescripción penal para delitos sexuales contra menores de edad, declarando la imprescriptibilidad de la acción o de la pena en estos casos. Algunos ejemplos:

La continuación de la prescripción del delito en Argentina diferencia al país del creciente número de países de América Latina que ya han derogado la prescripción del abuso sexual infantil por completo, entre ellos El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y México.

Ver [Informe del grupo de trabajo global sobre los plazos de prescripción en Latinoamérica', 2024, Brave Movement, CHILD Global, y Derecho al Tiempo.](#)

En este contexto regional, Argentina se encuentra rezagada. Su marco actual, que permite prescripción y sobreseimientos incluso en casos de extrema gravedad, resulta incongruente con las tendencias legislativas de la región y con los estándares internacionales que exigen remover obstáculos procesales en casos de violencia sexual infantil.

En continuidad con la comunicación presentada al Comité en abril de 2024, este Informe Sombra profundiza un eje jurídico que consideramos indispensable para comprender la magnitud de la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes en Argentina: su encuadre como tortura o, en su defecto, trato cruel, inhumano o degradante.

Mientras que el informe anterior se centró en la magnitud estructural de estas violencias, sus consecuencias y las barreras procesales derivadas de la prescripción, el presente documento amplía el análisis a la luz de las obligaciones del Estado conforme a la Convención contra la Tortura y la doctrina consolidada del Comité de los Derechos del Niño.

Este enfoque transforma la naturaleza de las obligaciones estatales. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes —incluida la explotación sexual comercial, las prácticas grupales como el chineo, la violencia sexual institucional, el embarazo forzado, la convivencia forzada

con el agresor y las violencias facilitadas digitalmente— debe ser objeto de prevención, investigación, sanción y reparación integral sin dilación y sin límites temporales.

La persistencia de obstáculos procesales o de regímenes prescriptivos constituye, desde esta perspectiva, una forma de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino y un factor que consolida la impunidad estructural ya señalada en el informe previo.

6.3 Prescripción y comisiones de la verdad

En el informe alternativo presentado en abril de 2024, las organizaciones firmantes propusimos la creación de una comisión independiente de la verdad para investigar de manera amplia, histórica y multisectorial la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes en Argentina, en todos los entornos intra y extrafamiliares.

Durante el período 2024–2025 no se registró ningún avance estatal en esta dirección: el proyecto de ley presentado por ARALMA y organizaciones aliadas no fue retomado por el por el Congreso.

La inexistencia de una comisión de la verdad específica sobre violencia sexual infantil mantiene la opacidad estructural: no hay reconstrucción histórica, no se identifican patrones institucionales ni se generan recomendaciones vinculantes de reparación y garantías de no repetición. Esta omisión es especialmente grave si se considera que, bajo el encuadre de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Estado tiene la obligación reforzada de establecer mecanismos extraordinarios de verdad y memoria, tal como ya se ha hecho en otros contextos de graves violaciones de derechos humanos.

En este sentido, reiteramos la recomendación formulada en 2024: que el Estado parte cree una comisión independiente de la verdad con mandato, recursos y facultades suficientes para investigar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en todos los entornos y formular recomendaciones de reparación integral y garantías de no repetición.

Reflexiones finales

La prescripción penal no sólo consolida la impunidad: debilita toda posibilidad de prevención y deja sin efecto los compromisos asumidos por el Estado en materia de protección integral. Los denominados “Juicios por la Verdad”, al carecer de consecuencias penales y de capacidad para imponer límites a los agresores, no ofrecen garantías suficientes a las víctimas ni cumplen con los estándares internacionales de reparación. Cuando una causa prescribe y se ofrece este mecanismo como única respuesta, el resultado es una verdad fragmentada, sin protección, sin sanción y sin reparación, lo que desalienta la denuncia y erosiona la confianza social en el sistema de justicia.

Una sociedad que responde a crímenes sexuales, que constituyen torturas vividas en plena edad de vulnerabilidad, mediante dispositivos simbólicos o carentes de efectos reales, reproduce la misma desmentida que permite que la violencia continúe. La prevención eficaz exige justicia efectiva.

En el informe alternativo presentado al Comité en 2024, las organizaciones firmantes propusimos la creación de una comisión independiente de la verdad para investigar la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes en todos los entornos. Una comisión de la verdad no es una extensión de los “juicios por la verdad”: es un mecanismo extraordinario, robusto, con mandato específico, facultades de investigación, acceso a archivos, participación de sobrevivientes y capacidad para emitir recomendaciones vinculantes de reparación y garantías de no repetición. El análisis comparado demuestra que, allí donde se implementaron comisiones de este tipo, fue posible reconstruir la magnitud del daño, identificar patrones institucionales de encubrimiento y promover reformas estructurales.

En Argentina, la persistencia de la prescripción penal, la ausencia de mecanismos extraordinarios de búsqueda de la verdad y el uso ocasional de procedimientos sin efectos penales configuran un escenario en el cual la justicia llega tarde, cuando llega, y la reparación integral continúa siendo excepcional. La combinación de imprescriptibilidad y comisión independiente de la verdad constituye el umbral mínimo para que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones de verdad, justicia y reparación frente a violencias que el derecho internacional reconoce como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes es, en todos los estándares internacionales relevantes, una forma de tortura y una violación gravísima de derechos humanos. En estas condiciones, no puede ni debe prescribir. La Convención contra la Tortura establece que los Estados deben garantizar la investigación, sanción y reparación sin dilación y sin obstáculos procesales. El Comité de los Derechos del Niño ha sido consistente al considerar que estas violencias constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, y con frecuencia tortura, dada la relación de poder, la intencionalidad del agresor y el daño profundo, persistente y acumulativo que generan.

A ello se añade un problema poco visibilizado: la existencia de actores e instituciones que instrumentalizan la violencia sexual infantil y las experiencias de los sobrevivientes para obtener visibilidad o financiamiento, sin promover transformaciones estructurales ni proteger efectivamente a las víctimas. Estas prácticas, lejos de contribuir a la erradicación de la violencia, reproducen dinámicas de explotación y desvían recursos y atención de las necesidades reales de protección. Una comisión independiente de la verdad, con participación efectiva de sobrevivientes, constituye también una herramienta para desarticular estas lógicas y recentrar el enfoque en los derechos de las víctimas.

La prevención de uno de los crímenes más graves que puede padecer una persona en la infancia exige integrar el conocimiento derivado de las experiencias de quienes sobrevivieron. Ninguna política pública será eficaz si no incorpora esta mirada. Los testimonios de

sobrevivientes no son únicamente memoria histórica: son insumos esenciales para diseñar sistemas de justicia, salud, protección y reparación que respondan adecuadamente a la complejidad y gravedad de estas violencias. Al mismo tiempo, su participación pública y reconocida habilita que otras víctimas puedan salir del silencio en condiciones de acompañamiento y seguridad.

En síntesis, la eliminación de la prescripción penal, la creación de una comisión independiente de la verdad y la incorporación sustantiva de la voz de los sobrevivientes constituyen pilares indispensables para que el Estado argentino avance hacia el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales y hacia la construcción de un sistema de protección capaz de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia sexual infantil.

Fin.

Follow-up communication to the Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child. ARALMA – Civil Association

98th Session of the CRC. Evaluation of compliance with the Concluding Observations (2024–2025)

Child sexual violence as a form of torture and the persistence of structural impunity in Argentina

December 2025

1. Purpose of this follow-up communication

This thematic communication is presented by ARALMA Civil Association together with allied organizations as a direct follow-up to the [Alternative Report](#) submitted to the Committee on the Rights of the Child in April 2024 and the Concluding Observations issued by the Committee in September 2024 (CRC/C/ARG/CO/7). In that communication, two central themes were developed: the need to eliminate the statute of limitations for crimes of sexual violence against girls, boys and adolescents and the creation of an independent truth commission to investigate decades of sexual violence in all settings.

The purpose of this document is to present the current situation of sexual violence against babies, girls, boys and adolescents in Argentina, to evaluate the degree of compliance with the

Committee's recommendations and to point out setbacks, omissions and structural gaps that occurred during the period 2024–2025.

Unlike the previous communication, this Shadow Report explicitly incorporates the international legal framework that recognizes child sexual violence as torture or, failing that, cruel, inhuman, or degrading treatment, in accordance with the Convention against Torture and the established interpretation of the Committee on the Rights of the Child. This recognition alters the nature of State obligations: States must prevent, investigate, punish, and provide full reparation for these crimes without delay, without procedural obstacles, and without time limits that perpetuate impunity. [See note](#)

The information presented is based on official sources from the Argentine State, documentation from the Judiciary, databases from specialized prosecutors' offices, reports from national and provincial public defenders' offices, as well as more than two decades of clinical, legal and psychosocial support to victims and survivors throughout the country.

2. Magnitude of child sexual violence in Argentina and lack of progress

The Committee expressed concern about the “high levels of violence and sexual abuse against children” and recommended that the Argentine State, among other things, ensure the prompt investigation of cases, eliminate the statute of limitations for criminal offenses, and create a unified national database on child sexual violence (CRC/C/ARG/CO/7). During the monitoring period, the State made no progress on any of these points.

The available official data, fragmented, partial and limited by the lack of a national information system, confirms that sexual violence against girls, boys and adolescents remains a structural, persistent and mostly intrafamilial phenomenon:

The Supreme Court's Domestic Violence Office reported that in the first quarter of 2025 it received 712 submissions affecting 958 children and adolescents; 11% corresponded to sexual abuse, with an average age of 9 years and with parents as the main aggressors

Source: <https://www.csjn.gov.ar/novedades/detalle/9763>

The General Database of Children and Adolescents of the Judiciary recorded 2,076 cases initiated by minors under 18 years of age in 2024, of which, among non-property crimes, 32.1% were crimes against sexual integrity.

Source: <https://www.csjn.gov.ar/bgd/verNoticia?idNoticia=9522>

According to the Office of the Prosecutor for Trafficking and Exploitation of Persons (PROTEX), 77.2% of the sentences for trafficking in persons correspond to sexual exploitation, including victims under the age of 18.

Source: <https://www.mpf.gob.ar/protex/plataforma-estadistica/>

The Public Prosecutor's Office of the Province of Buenos Aires documents a sustained increase in causes of digital child sexual exploitation, including production, distribution and consumption of child sexual abuse depictions (PI Report 2023).

Source: <https://www.mpba.gov.ar/files/informes/Informe-PI-2023.pdf>

The Ombudsman for the Rights of Girls, Boys and Adolescents of the Nation pointed out in its 2025 federal report that Argentina still does not have a national database, that there is chronic underreporting and that the provinces use heterogeneous criteria that prevent measuring the real magnitude of the problem.

Source:

<https://ladefe.gob.ar/wp-content/uploads/2025/04/Violencia-sexual-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-Analisis-federal-de-protocolos-1.pdf>

These data confirm that child sexual violence in Argentina is neither decreasing nor being addressed with robust public policies, and that the State lacks monitoring and prevention mechanisms that meet the minimum standards required by the Convention on the Rights of the Child.

3. Child sexual violence as torture: implications for the Argentine State

Child sexual violence meets all the legal elements that define torture according to the Convention against Torture: severe physical or mental pain or suffering, intent of the perpetrator, absolute asymmetry of power, domination of the child's body and subjectivity, persistent psychological damage comparable to terror and subjective annihilation.⁽¹⁾

General Comment No. 13 of the Committee on the Rights of the Child identifies sexual violence as one of the most extreme forms of violence and underlines the reinforced nature of state obligations regarding prevention, investigation and redress:

The Committee on the Rights of the Child has already recognized that sexual violence against children and adolescents constitutes cruel, inhuman, or degrading treatment and, in many situations, torture. Therefore, the Argentine State cannot maintain procedural rules that perpetuate impunity, such as the statute of limitations, the lack of accessible reporting mechanisms, or the absence of comprehensive reparations that could be achieved through truth commissions that would recover the historical truth of the events.

4. Institutional setbacks (2024–2025) and worsening of the conditions that allow child sexual violence

Since the issuance of the Committee's Concluding Observations in September 2024, the Argentine State has not only failed to make progress on the recommendations established regarding the prevention, investigation and reparation of sexual violence against girls, boys and adolescents, but there have also been institutional setbacks that deepen the structural conditions that allow impunity and the systematic reproduction of these crimes.

The main setbacks observed are the following:

4.1. Dismantling of state areas in charge of childhood and gender policies

Between the end of 2023 and during 2024–2025, various government areas linked to childhood, gender and social protection suffered processes of: defunding, reduction of specialized staff, elimination of programs, institutional degradation in their hierarchy, discontinuity of lines of psychosocial support.

These conclusions are supported, among other inputs, by the analysis of official budget reports on spending related to childhood and adolescence in the national budget, by reports from organizations specializing in monitoring public spending (such as ACIJ and ELA) and by documented testimonies from national and provincial technical teams.

Sources:

[ACIJ / ELA – Report “3J 2024 – Adjustment, inequality and setbacks in gender and diversity policies”](#)

[Office of the Chief of the Cabinet of Ministers – Monitoring of spending related to children and adolescents in the national budget](#)

[Two years into the current administration, the erosion of women's and LGBTQ+ rights is deepening](#)

This reduction in state capacity directly affects the implementation of minimum measures for prevention, support, access to justice, investigation, and redress for victims of child sexual abuse. The absence of proactive public policies contradicts the state's obligation to "take measures to protect children from all forms of violence," as established in Article 19 of the Convention on the Rights of the Child.

Limitations and gaps in official information on reporting lines (Lines 137 and 102)

Although the Argentine State maintains formal care mechanisms, the available official information shows significant shortcomings that prevent an evaluation of its effectiveness in the prevention and detection of child sexual violence.

In the case of Line 137, the [Open Data portal of the Ministry of Justice](#) It publishes microdata on calls and interventions related to sexual violence only up to July 2024. There are no consolidated public reports for 2025, nor are there any comprehensive reports that would allow for analysis of the annual trends broken down by age, type of violence, or jurisdiction, and the resolution of cases. This information was published in annual reports by the agency a few years ago.

Regarding Line 102, there is no unified national data system. The available information comes from a few jurisdictions— mainly the Autonomous City of Buenos Aires, Salta, La Pampa, and

Mendoza—and shows the existence of the service, but without public statistics that would allow us to know the number of calls, reasons for consultation, performance indicators, or the volume of cases of child sexual abuse handled. There is no official data to evaluate territorial coverage, staffing levels, or response capacity in emergency situations.

In this context, the absence of complete, comparable, and disaggregated data constitutes in itself a failure to comply with the Committee's recommendations (CRC/C/ARG/CO/7).

The lack of public information makes it impossible to measure whether the State has strengthened or weakened these mechanisms and limits transparency, prevention and effective protection against violence that constitutes torture or cruel, inhuman or degrading treatment.

Source: [Annual Report, Ombudsman for the Rights of Children and Adolescents, Argentina.](#)

4.2. Absence of a national strategy for the prevention of child sexual violence

Although the Committee expressly recommended “developing and implementing a comprehensive national strategy to prevent sexual violence” there is no state initiative underway that fulfills this mandate.

There are no sustained national campaigns, coordinated federal programs, action plans, updated protocols, or mechanisms for interprovincial collaboration. This omission prevents the population from accessing basic prevention information and hinders the early detection of cases of sexual violence and child exploitation by health, education, and judicial systems.

4.3. Lack of a unified national data system

The Argentine State continues to fail to comply with the Committee's requirement to “create a disaggregated national database on child violence”.

As a result, each province collects its own data in a fragmented way, there are no unified criteria, there is no national monitoring, it is not possible to measure real incidence or evaluate the impact of policies, and chronic underreporting is perpetuated, which in itself constitutes a violation of rights.

Recent reports from the National Ombudsman for the Rights of Children and Adolescents confirm this structural lack of federal coordination:

“Only 15 of the country's 24 jurisdictions have intervention protocols and/or action guidelines for the inter-institutional approach to situations of sexual violence against children and adolescents, and in many cases these require updating to align with legal advances and professional perspectives. Some of the findings reveal that most focus on the criminal process, overshadowing the actions of the civil justice system and administrative bodies. Most make no mention of prevention and/or awareness-raising actions, nor of mandatory training for the teams

involved. Furthermore, there is an absence of an intersectional perspective that considers the specific needs of people with disabilities, migrants, Indigenous people, and others”.

Source: [Ombudsman for the Rights of Children and Adolescents of the Nation – “Sexual violence against children and adolescents. Federal analysis of protocols” \(2025\)](#)

4.4. Setbacks in the state's capacity to respond to emergency situations

During 2024–2025, health, education, territorial care and justice professionals have reported: closures or weakening of specialized teams, lack of resources to support emergencies, delays in judicial referrals, absence of immediate psychotherapeutic care, reduction of community services.

Source: [El País newspaper](#)

This situation contravenes the Committee's recommendation to "guarantee immediate comprehensive interventions for victims" (CRC/C/ARG/CO/7)

4.5. The State has not taken any steps to eliminate the statute of limitations for criminal offenses

Despite the Committee's explicit recommendation to "eliminate the statute of limitations for child sexual abuse offenses," no legislative progress was recorded.

During the period under consideration: no committees were convened to address the issue, no opinions were issued, no debate took place in the chamber, and no official proposal was issued to fulfill the Committee's mandate

Meanwhile, they continue to dismiss extremely serious cases, consolidating structural impunity.

In this context, it is necessary to highlight the recent announcement by the national government—through the Minister of Security—regarding the imminent presentation of a draft bill to reform the Penal Code, which would include the elimination of the statute of limitations for sexual offenses committed against children and adolescents. However, to date, the official text of this draft bill has not been published or made available for public consultation, and there is no clarity regarding its actual content, scope, or legal basis. Furthermore, specialists, civil society organizations, and survivors have not been consulted to work collaboratively and inclusively on a reform of this magnitude. This lack of transparency and early participation is a cause for concern, given that the elimination of the statute of limitations represents a historical debt of the Argentine State to guarantee truth, justice, and reparations in the face of child sexual violence.

Source:

[The Gazette, December 1, 2025](#)

4.6. Weakening of reporting mechanisms and access to justice

The lack of public campaigns, the absence of specialized reporting channels and the discontinuity of territorial teams reinforce the barriers that prevent girls, boys and adolescents from accessing justice in a timely manner.

The Committee had also recommended “creating accessible reporting channels for minors in all environments, including institutions” (CRC/C/ARG/CO/7), a recommendation that remains unfulfilled.

5. Failure to comply with the recommendations of the Committee on the Rights of the Child (2024–2025)

The following is a detailed analysis of the degree of state compliance with each of the recommendations related to sexual violence, torture, exploitation and access to justice, formulated by the Committee in September 2024. The period examined covers from the issuance of the Concluding Observations until December 2025.

5.1. Recommendation 23.a — Comprehensive national strategy for the prevention of child sexual violence

Compliance status: Not complied.

The Committee urged the Argentine State to develop and implement an integrated national strategy to prevent sexual violence against girls, boys and adolescents.

During the supervised period:

- No national plan was developed.
- No coordinated federal policies were designed.
- No general guidelines were issued for provinces or municipalities.
- There are no sustained public prevention campaigns.

The absence of a national strategy directly contradicts the obligations outlined in Articles 19 and 39 of the Convention on the Rights of the Child.

5.2. Recommendation 23.b — Specific legislation and policies to address child sexual violence

Compliance status: Not complied.

The State has not prepared, submitted or discussed any legislative project that implements the Committee's recommendations.

No reforms were promoted for:

- update regulatory frameworks,
- strengthen protection mechanisms
- standardize protocols,
- guarantee comprehensive specialized care.

5.3. Recommendation 23.c — Create a unified national database

Compliance status: Not complied.

Argentina still lacks a national data system on child sexual abuse. Information remains fragmented across provincial or partial national agencies (Office of Domestic Violence, PROTEX, prosecutors' offices, public defenders' offices). There is no:

- interoperability,
- common registration criteria
- unified indicators
- annual update
- full public reports

The National Ombudsman's Office again warned in 2025 about the chronic underreporting and the absolute absence of federal data coordination:

Source:

[Office of the Ombudsman for the Rights of Children and Adolescents of the Nation – “Sexual violence against children and adolescents. Federal analysis of protocols” \(2025\)](#)

5.4. Recommendation 23.e — Accessible reporting channels for girls, boys and adolescents

Status of compliance: Not fulfilled.

The Committee called for ensuring accessible reporting channels in all environments — homes, institutions, schools, churches, sports clubs, religious communities.

During the observed period:

- Line 102 was not strengthened nor was its reach expanded.
- No new specialized channels were created for the care of children and adolescents.
- No mechanisms were developed in schools or clubs.
- Safe reporting channels for institutionalized victims were not implemented.

Access to reporting continues to depend on adult intermediaries, which violates the principle of progressive autonomy and the right to be heard (articles 12 and 19 of the Convention on the Rights of the Child).

Intersectional perspective and structural omissions in current protocols

Sexual violence against girls, boys and adolescents does not affect all people equally. When the victim belongs to historically discriminated groups—people with disabilities, Indigenous communities, people of diverse identities, girls and adolescent women, migrants—the violation of their rights deepens and the barriers to accessing protection and justice multiply. These situations require an approach that recognizes that certain groups are exposed to greater risks, greater obstacles, and higher levels of impunity.

However, the current protocols and guidelines analyzed by the Ombudsman's Office largely omit these dimensions of vulnerability. The absence of an intersectional perspective limits the State's capacity to prevent violence, to intervene appropriately when it occurs, and to ensure that victims are heard and protected throughout the entire process.

Adopting this approach is not optional: it is essential to ensure enhanced due diligence. [UNICEF's 2023 Good Practice Guide](#) for the comprehensive approach to and access to justice for children and adolescents who are victims or witnesses of sexual violence. It points out the need for "an intersectional perspective that allows us to understand the complexity of the context in which the victims find themselves, as well as to deconstruct myths, prejudices and stereotypes that operate at all stages of intervention, especially in judicial processes".

These biases can influence: which hypotheses are investigated and which are discarded, what evidence is collected and with what priority, how the expert reports are conducted, how the evidence presented is assessed, and, ultimately, whether or not the process guarantees the victim's right to obtain justice.

The data collected by the Ombudsman's Office shows the magnitude of the omissions: disability is only mentioned in 8 of the 15 instruments analyzed, and only 5 include specific guidelines for addressing it; gender status is recognized in 5 instruments, of which only 3 explicitly state clear criteria; indigenous affiliation is mentioned only once and without any operational specification; migratory status or belonging to other vulnerable identities are practically not included.

Source:

[Ombudsman for the Rights of Children and Adolescents of the Nation – “Sexual violence against children and adolescents. Federal analysis of protocols” \(2025\)](#)

Without the full incorporation of these dimensions, the State fails to fulfill its obligation to guarantee real conditions of equality before the law, nor does it comply with international standards that require reinforced measures when there are accumulated factors of vulnerability.

5.5. Recommendation 23.f — Mandatory reporting by professionals

Status of compliance: Not complied with

No measures were taken to: review or strengthen mandatory reporting frameworks, train health, education, justice or sports professionals, establish sanctions for non-compliance, or monitor effective compliance.

The omission is serious because child sexual violence is mostly intrafamilial, and early detection depends largely on the education and health system.

Critical deficit in the specialized training of the responsible actors

All actors involved in the prevention, detection, care, and protection of children and adolescents—health, education, justice, security, sports, religious institutions, administrative bodies, and territorial teams—must receive mandatory, ongoing, specialized training with a human rights perspective. This requirement stems from the Convention on the Rights of the Child.

However, the analysis of the protocols and guidelines carried out by the Ombudsman's Office reveals a structural deficit:

- Only 1 of the 15 instruments reviewed mentions the need for specialized training and details its contents
- 8 instruments mention it in a general way, without technical specifications
- 6 do not include any reference to training

This means that the training of those who must protect girls and boys is not homogeneous, is not mandatory in all cases and, in many contexts, does not exist, which aggravates exposure to risk, weakens early detection and perpetuates institutional revictimization.

The deficit cannot be addressed solely through Law 27.709, which focuses on mandatory training for state agents regarding the rights of children and adolescents. While the law represents a step forward, it does not replace specific training on signs, symptoms, clinical and behavioral indicators, nor the skills necessary for early detection, appropriate intervention, a non-harm approach, and comprehensive protection. The current implementation of the law does not cover the diverse range of stakeholders involved, nor does it guarantee technical training on child sexual abuse, digital exploitation, or intersectoral protocols.

Source: [Law 27.709 Federal Plan](#)

It is essential that each province and the Autonomous City of Buenos Aires develop their own specialized training programs, mandatory for all providers of a protection system, with unified minimum content, continuously updated modules, and materials aligned with international standards. ARALMA has proposed the creation of a national organizational child protection policy applicable to the entire protection system in Argentina, as well as the establishment of a specific sexual violence unit directly under the National Ombudsman for the Rights of Children and Adolescents. However, the Ombudsman's Office remains without a head, despite the public

competition held by the Joint Congressional Committee on Children's Rights, which exacerbates the lack of leadership and coherent policies at the federal level.

Without this regulatory and institutional framework, the Argentine State will continue to fail to fulfill its obligation to guarantee an adequate and timely response to violence that, according to international human rights law, constitutes torture or cruel, inhuman or degrading treatment.

5.6. Recommendation 23.g — Rapid, effective and non-revictimizing investigation

Status of compliance: Not fulfilled.

During 2024–2025, there was no strengthening of the judicial system to expedite investigations or prevent the revictimization of children. The following persist:

- structural delays
- repeated intrusive examinations
- dependence on single testimonies
- Lack of interdisciplinary teams
- Excessive judicial fragmentation

Various courts continued to declare the statute of limitations in serious cases, even before initiating a trial, despite the obligation of enhanced due diligence in cases of sexual violence against minors, as recalled by the Committee on the Rights of the Child and other international bodies.

5.7. Recommendation 23.h — Eliminate the statute of limitations for sexual offenses against children and adolescents

Status of compliance: Not fulfilled

No bill aimed at abolishing the statute of limitations was discussed.

- No information sessions or committee presentations were convened
- There were no rulings
- It was not debated in the chamber

The State failed to comply with the Committee's explicit mandate. Meanwhile, structural impunity persists, with cases being dismissed due to the statute of limitations without sufficient investigation.

5.8. Recommendation 23.i — Immediate access to comprehensive interventions

Compliance status: Not complied

The Concluding Observations instructed the State to guarantee:

- Immediate psychological attention

- medical and forensic care
- legal support
- comprehensive post-attack protection

During the observed period:

- Numerous teams were defunded
- Territorial devices were reduced
- Psychological care depends on civil organizations or provincial efforts isolated
- There is no federal mechanism for comprehensive post-child sexual violence care

5.9. Recommendation 23.j — Support for adolescents pregnant by sexual abuse

Status of compliance: Not fulfilled

The reduction of sexual health programs, the discontinuation of support services, and the lack of specific policies for adolescents pregnant as a result of sexual violence constitute a direct breach of this recommendation.

6. The imprescriptibility of the crime of child sexual violence as an international obligation

The elimination of the statute of limitations for crimes of sexual violence committed against girls, boys and adolescents is not a sectoral demand or an isolated claim: it is an international legal obligation derived from the human rights treaties ratified by the Argentine Republic, particularly the Convention on the Rights of the Child, the Convention against Torture and the consolidated jurisprudence of the interAmerican system.

During the 97th and 98th sessions of the Committee on the Rights of the Child, the Argentine State received an explicit and priority recommendation: “The State party must eliminate the statute of limitations for crimes of child sexual abuse.” Total non-compliance with this mandate constitutes a continuing violation of its obligations.

a) Child sexual violence, including commercial sexual exploitation, child molestation, forced pregnancy, forced cohabitation with the perpetrator, institutional sexual violence, and digitally facilitated violence, constitutes torture or cruel, inhuman, or degrading treatment. The Convention against Torture requires States to investigate, prosecute, and punish acts of torture without undue delay or hindrance.

The Committee on the Rights of the Child has recognized that sexual violence against children and adolescents constitutes torture or cruel, inhuman or degrading treatment when it involves:

- severe physical or mental suffering intentionality of the perpetrator
- absolutely asymmetrical power relationship

- destruction of the body, subjectivity and life project of the child or adolescent

This includes all documented modalities in Argentina, including:

Forms of sexual violence against babies, girls, boys and adolescents

- Intrafamily sexual violence, perpetrated by members of the family unit or the direct cohabitation environment or those with caregiving functions, who take advantage of the relationship of trust, dependence, authority or affection
- Commercial sexual exploitation, where infants, children, or adolescents are used in sexual acts by third parties who obtain an economic, material, or power-based benefit, including different forms of commodification of children's bodies and minds
- Trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation, which involves the recruitment, transportation, harboring, or receipt of children or adolescents through deception, coercion, abuse of power, or exploitation of situations of vulnerability, for the purpose of sexual exploitation
- Chineo, a group or serial rape practice characterized by extreme dehumanization, structural racism and collective subjugation, directed mainly against indigenous girls and adolescents, recognized by human rights organizations as a form of aggravated sexual violence
- Forced pregnancy, recognized by international organizations as a form of torture and sexual violence, due to the absolute deprivation of bodily autonomy, the imposition of motherhood and the serious and lasting physical, psychological and social impact on girls and adolescents
- Forced cohabitation with the aggressor, which exposes girls, boys or adolescents to repeated sexual violence and establishes a regime of daily control, coercion and submission comparable to situations of domestic captivity
- Institutional sexual violence, perpetrated by public officials, state agents, workers in institutions of confinement, care, health or education, or facilitated by state action, omission, tolerance or cover-up. This includes abuses committed in protection facilities, juvenile detention centers, schools, hospitals, security forces and religious or paramilitary settings where the State has a reinforced obligation of prevention, control and supervision
- Digitally facilitated sexual violence, including grooming, sextortion, coercion to produce sexual material, forced transmission of live sexual content (live streaming), production, dissemination and permanent circulation of child sexual abuse material, which prolongs the damage, eternalizes the crime scene and amplifies the reach of the aggressor

All these practices produce cumulative and prolonged damage, and in the case of the digital environment, unlimited victimization, because the material can circulate indefinitely.

Since torture does not admit of criminal prescription, any regime that maintains extinctive time limits in sexual crimes against girls, boys and adolescents is incompatible with international standards.

b) The obligation of enhanced due diligence requires the removal of procedural obstacles

International law imposes a reinforced duty on States to guarantee effective access to justice. Sexual violence against children presents widely documented characteristics:

- late revelation, even decades late
- silencing through threats, economic or emotional dependence
- material or emotional impossibility of reporting during minority, especially when there is cohabitation or institutional confinement
- dissociation, traumatic amnesia and prolonged subjugation
- fear of retaliation from individual aggressors, networks or institutions
- Institutional revictimization, particularly serious when the abuse occurs in settings state-level
- in digital violence, continuous victimization, due to the indefinite circulation of the material

For these reasons, international organizations maintain that premature criminal prescription:

- perpetuates impunity
- violates the right to the truth
- prevents access to justice under equal conditions

Therefore, international organizations maintain that premature criminal prescription perpetuates impunity, violates the right to the truth and hinders access to justice under equal conditions.

6.2. Comparative standards in Latin America

Several countries in the region have made progress in eliminating the statute of limitations for sexual offenses against minors, declaring that the action or the penalty is not subject to any statute of limitations in these cases. Some examples:

The continued statute of limitations for child sexual abuse in Argentina sets the country apart from the growing number of Latin American countries that have already completely abolished the statute of limitations for child sexual abuse, including El Salvador, Ecuador, Peru, Chile, Colombia, and Mexico.

See: [Report of the global working group on limitation periods in Latin America', 2024, Brave Movement, CHILD Global, and Right to Time](#)

In this regional context, Argentina is lagging behind. Its current framework, which allows for statutes of limitations and dismissals even in cases of extreme gravity, is inconsistent with legislative trends in the region and with international standards that require the removal of procedural obstacles in cases of child sexual abuse.

Continuing with the communication submitted to the Committee in April 2024, this Shadow Report delves deeper into a legal aspect that we consider essential to understanding the magnitude of sexual violence against babies, girls, boys and adolescents in Argentina: its classification as torture or, failing that, cruel, inhuman or degrading treatment.

While the previous report focused on the structural magnitude of these acts of violence, their consequences and the procedural barriers arising from the statute of limitations, this document expands the analysis in light of the State's obligations under the Convention against Torture and the consolidated doctrine of the Committee on the Rights of the Child.

This approach transforms the nature of state obligations. Sexual violence against children and adolescents—including commercial sexual exploitation, group practices such as chineo, institutional sexual violence, forced pregnancy, and forced cohabitation—with the aggressor and the digitally facilitated violence—must be subject to prevention, investigation, punishment and comprehensive reparation without delay and without time limits.

From this perspective, the persistence of procedural obstacles or prescriptive regimes constitutes a form of non-compliance with the international obligations of the Argentine State and a factor that consolidates the structural impunity already noted in the previous report.

6.3 Statute of limitations and truth commissions

In the alternative report presented in April 2024, the signatory organizations proposed the creation of an independent truth commission to investigate in a broad, historical and multisectoral manner the sexual violence against babies, girls, boys and adolescents in Argentina, in all intra and extrafamily environments.

During the period 2024–2025, no state progress was recorded in this direction: the bill presented by ARALMA and allied organizations was not taken up by Congress.

The absence of a specific truth commission on child sexual violence perpetuates structural opacity: there is no historical reconstruction, no identification of institutional patterns, and no binding recommendations for reparations and guarantees of non-repetition. This omission is especially serious considering that, under the framework of torture and cruel, inhuman, or degrading treatment, the State has a heightened obligation to establish extraordinary

mechanisms for truth and memory, as has already been done in other contexts of serious human rights violations.

In this regard, we reiterate the recommendation made in 2024: that the State party create an independent truth commission with sufficient mandate, resources and powers to investigate sexual violence against girls, boys and adolescents in all environments and formulate recommendations for comprehensive reparation and guarantees of non-repetition.

Final reflections

The statute of limitations not only consolidates impunity but also weakens any possibility of prevention and nullifies the commitments made by the State regarding comprehensive protection. So-called "Trials for Truth," lacking criminal consequences and the capacity to impose limits on perpetrators, do not offer sufficient guarantees to victims nor do they comply with international standards of reparation. When a case is time-barred and this mechanism is offered as the only response, the result is a fragmented truth, without protection, without punishment, and without reparation, which discourages reporting and erodes public trust in the justice system.

A society that responds to sexual crimes—which constitute torture experienced during a period of heightened vulnerability—with symbolic or ineffective measures perpetuates the very denial that allows violence to continue. Effective prevention requires effective justice.

In the alternative report submitted to the Committee in 2024, the undersigned organizations proposed the creation of an independent truth commission to investigate sexual violence against infants, children, and adolescents in all settings. A truth commission is not an extension of "truth trials"; it is an extraordinary, robust mechanism with a specific mandate, investigative powers, access to archives, survivor participation, and the capacity to issue binding recommendations for reparations and guarantees of non-repetition. Comparative analysis demonstrates that, where such commissions have been implemented, it has been possible to reconstruct the magnitude of the harm, identify institutional patterns of cover-up, and promote structural reforms.

In Argentina, the persistence of the statute of limitations for criminal offenses, the absence of extraordinary mechanisms for seeking the truth, and the occasional use of procedures without penal consequences create a scenario in which justice is slow to arrive, if it arrives at all, and full reparations remain exceptional. The combination of imprescriptibility and an independent truth commission constitutes the minimum threshold for the Argentine State to fulfill its obligations of truth, justice, and reparations in the face of violence that international law recognizes as torture or cruel, inhuman, or degrading treatment.

Sexual violence against infants, children, and adolescents is, under all relevant international standards, a form of torture and a grave violation of human rights. Under these circumstances, it cannot and should not be subject to any statute of limitations. The Convention against Torture

establishes that States must guarantee investigation, punishment, and redress without delay and without procedural obstacles. The Committee on the Rights of the Child has consistently held that such violence constitutes cruel, inhuman, or degrading treatment, and frequently torture, given the power imbalance, the perpetrator's intent, and the profound, persistent, and cumulative harm it causes.

Added to this is a less visible problem: the existence of actors and institutions that exploit child sexual violence and the experiences of survivors to gain visibility or funding, without promoting structural changes or effectively protecting victims. These practices, far from contributing to the eradication of violence, reproduce dynamics of exploitation and divert resources and attention from the real needs for protection. An independent truth commission, with the effective participation of survivors, is also a tool to dismantle these practices and refocus the approach on the rights of victims.

Preventing one of the most serious crimes a person can suffer in childhood requires integrating the knowledge derived from the experiences of those who survived. No public policy will be effective if it does not incorporate this perspective. The testimonies of survivors are not merely historical memory: they are essential inputs for designing justice, health, protection, and reparation systems that adequately address the complexity and severity of this violence. At the same time, their public and recognized participation empowers other victims to break their silence in conditions of support and safety.

In summary, the elimination of the statute of limitations for criminal offenses, the creation of an independent truth commission, and the substantive incorporation of the voices of survivors are indispensable pillars for the Argentine State to move towards the effective fulfillment of its international obligations and towards the construction of a protection system capable of preventing, investigating, punishing, and repairing child sexual violence.

End.